



TEMARIO ADMINISTRATIVO

Servicio Andaluz de Salud- SAS
Temario específico
Ed.2025



TEMARIO ADMINISTRATIVO
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Temario específico
ISBN: 978-84-1383-983-7
Reservados todos los derechos
© 2025 | IEDITORIAL

No se permite la reproducción total o parcial de esta obra,
ni su incorporación a un sistema informático,
ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio
(electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros)
sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.

La infracción de dichos derechos puede constituir un delito
contra la propiedad intelectual.
Editado por: iEditorial
E-mail: info@ieditorial.com
Web: www.ieditorial.net

Diseño de cubierta: iEditorial
Impreso en España. Printed in Spain

TEMARIO

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 11. Plan de calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) Calidad en el sistema sanitario: métodos de evaluación. El modelo andaluz de acreditación y calidad. La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

Tema 12. Derechos y garantías de los ciudadanos y calidad asistencial en el SSPA. Tiempos de respuesta asistencial. Libre elección de centro sanitario y profesional. Cobertura sanitaria. Segunda opinión médica. Transparencia y calidad en los servicios. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada: organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.

Tema 13. Prevención de riesgos laborales. Riesgos laborales específicos en el desempeño de las funciones del/la Administrativo/a. Medidas preventivas específicas.

Tema 14. El Estatuto Básico del Empleado Público. Objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos. Adquisición y pérdida de la relación de servicio.

Tema 15. La Administración Pública. El concepto de Administración Pública y su papel en el ordenamiento político del Estado. El sometimiento de la Administración al Derecho. Los principios de legalidad y jerarquía normativa. La discrecionalidad de la Administración: concepto, fundamento y límites.

Tema 16. Normativa vigente sobre el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (I): Ámbito de aplicación. Los interesados: concepto y capacidad de obrar. Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración. La obligación de resolver: el silencio administrativo. Términos y plazos. El acto administrativo: concepto y requisitos; motivación; eficacia; notificación y la publicación. Nulidad y anulabilidad de los actos.

Tema 17. Normativa vigente sobre el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (II): Derechos del interesado en el procedimiento. Tramitación ordinaria del procedimiento: iniciación; ordenación; instrucción y finalización. Tramitación simplificada del procedimiento. Ejecución. Revisión de los actos en vía administrativa: la revisión de oficio y los recursos administrativos. Especialidades en los procedimientos de naturaleza sancionadora. Especialidades en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.

Tema 18. Normativa vigente sobre Régimen Jurídico del Sector Público (I): Ámbito subjetivo y principios generales. Los órganos administrativos: competencia. Los órganos colegiados: funcionamiento. Abstención y recusación. Principios de la potestad sancionadora.

Tema 19. Normativa vigente sobre Régimen Jurídico del Sector Público (II): La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y de las autoridades y del personal al servicio de la Administración Pública. Derecho a indemnización.

Tema 20. Creación de documentos. Uso no sexista del lenguaje administrativo. Documentos originales y copias. El desglose de los documentos originales y formación del expediente. El derecho de acceso a los documentos administrativos.

Tema 21. Atención a la ciudadanía (I). Las relaciones entre la administración sanitaria y los ciudadanos en el Servicio Andaluz de Salud. La información administrativa. Las sugerencias y reclamaciones. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La presentación de escritos y comunicaciones. Registro de documentos: conceptos de entrada y salida de documentos.

Tema 22. Atención a la ciudadanía (II). Manual de estilo del Servicio Andaluz de Salud. Valores y principios. Habilidades sociales y comunicación. El Ciudadano como centro de nuestro Sistema Sanitario. La comunicación como herramienta de trabajo. Estilos de comunicación. El derecho a la información y a la confidencialidad.

Tema 23. Ordenación de los recursos humanos del Servicio Andaluz de Salud. Planificación y clasificación orgánica y funcional de las plantillas.

Tema 24. Provisión de plazas del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud. Selección de personal estatutario fijo. Promoción interna. Movilidad en todas sus modalidades y reingreso al servicio activo. Comisiones de servicio. Promoción interna temporal. Proceso de provisión de puestos directivos y de cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Tema 25. La selección de personal temporal en el Servicio Andaluz de Salud. El Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad y la convocatoria sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud. Convocatoria del proceso de selección de personal temporal del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades Farmacia y Veterinaria.

Tema 26. Jornada de trabajo, permisos y licencias. Especial referencia a las directivas comunitarias en esa materia. Su gestión en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

Tema 27. Régimen disciplinario del personal estatutario. Órganos competentes. Procedimiento disciplinario. Órganos competentes. Faltas y sanciones. Prescripción de faltas y sanciones. Medidas cautelares.

Tema 28. Incompatibilidades del personal del Servicio Andaluz de Salud. Normativa aplicable. Órganos competentes en la Administración de la Junta de Andalucía. Procedimiento.

Tema 29. Retribuciones del personal estatutario en el Servicio Andaluz de Salud. Retribuciones básicas y complementarias. Estructura y normas de confección de nóminas. Tramitación y justificación de nóminas. Descuentos: Seguridad Social e IRPF. Gestión de descuentos.

Tema 30. El sistema español de Seguridad Social (I). Régimen general y Regímenes especiales. Afiliación. Altas y Bajas: procedimientos y efectos. Cotización: concepto y naturaleza jurídica. Bases y tipos de cotización.

Tema 31. El sistema español de Seguridad Social (II). Contingencias y situaciones protegidas. Prestaciones: incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, incapacidad permanente, jubilación.

Tema 32. Gestión presupuestaria (I). La Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ley de Presupuestos: estructura y aspectos generales del contenido. Competencias de las Agencias Administrativas.

Tema 33. Gestión presupuestaria (II). El ciclo presupuestario. Fases del presupuesto. Prórroga. Créditos de anualidades futuras. Las modificaciones presupuestarias: tipos y órganos competentes. La contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía: fases de ingreso y de gasto y documentos contables. El control de la actividad financiera: clases de control y órganos competentes. El control de la Cámara de Cuentas.

Tema 34. Normativa vigente en materia de Contratos del Sector Público: Tipos de Contratos. Órganos competentes para su celebración. Incapacidad y prohibiciones. Invalidez de los Contratos. Actuaciones Administrativas preparatorias de los contratos. Procedimientos de Contratación. Efecto, cumplimiento y extinción de los contratos.

Tema 35. La contratación en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. El Contrato de Obras: actuaciones previas y expedientes de contratación; procedimiento para la contratación; formalización; certificaciones; y liquidación. El Contrato de Suministros: actuaciones preparatorias; formas de adjudicación; y formalización. El Contrato de Servicios: objeto del contrato; preparación, adjudicación y formalización. Delegación de competencias en el Servicio Andaluz de Salud.

Tema 36. La gestión de almacenes. Inmovilizado: concepto y clasificación. Gestión de existencias. Criterios de valoración. Cálculo de stocks.

Tema 37. Sistema de contabilidad analítica en el Servicio Andaluz de Salud. Control de consumos. Determinación de las unidades de costo sanitario. Estándares.

Tema 38. La gestión hostelera. Alimentación: procesos funcionales. Lencería y lavandería: procesos funcionales. Los Residuos sanitarios: conceptos básicos, clasificación y gestión.

Tema 39. La gestión de mantenimiento. Concepto, estructura y tipos. Especial referencia al mantenimiento preventivo.

Tema 40. El modelo de compras en el Servicio Andaluz de Salud. Las Centrales de Compras. Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud. Revista de Compras. El sistema de identificación de productos. Gestión telemática de la contratación en el ámbito de la Junta de Andalucía (SIREC). El Registro de Implantes Quirúrgicos. Gestión electrónica de compras, el Portal de Compras. Punto Único de Entrada de Factura Electrónica.

Tema 41. Sistemas de información en el Servicio Andaluz de Salud: Gestión de Recursos Humanos en el Servicio Andaluz de Salud (GERHONTE); Sistema Integral de Gestión Logística (SIGLO). Sistemas de información corporativos de la Junta de Andalucía: Gestión Integral de Recursos Organizativos (GIRO); Sistema Unificado de Recursos (SUR).

Tema 42. Los sistemas de registro sanitario asistencial. Estructura y confección de la Historia Clínica. La conservación de la documentación: Archivos de historias. Criterios de clasificación de documentos. Documentos de uso de las instituciones sanitarias: administrativa y clínica. Archivo de documentos: naturaleza y clases de archivos; entrada, salida y devoluciones. Estructura general del DIRAYA: Estructura y contenido de la Tarjeta Sanitaria. Historia digital de salud del ciudadano. La Base de Datos de Usuarios (BDU).

Tema 43. Los sistemas de admisión y documentación clínica. Gestión de listas de espera. Las Unidades de Atención a la Ciudadanía en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud: concepto, organización y funciones. Sistemas de información en torno a la Asistencia Especializada y Atención Primaria de Salud.

Tema 44. Tecnología Sanitaria. Concepto y uso apropiado de la Tecnología Sanitaria. Atribuciones de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía.

Tema 45. Los sistemas informáticos: conceptos básicos, estructura, elementos, clasificación, funcionalidad y codificación de la información. Hardware, estructura funcional de un ordenador, componentes físicos, periféricos de entrada y salida. Software, soporte lógico de un ordenador: conceptos básicos, elementos, clasificación y funcionalidades, sistemas operativos. Mantenimiento básico de los ordenadores (Preventivo y Correctivo). Nociones básicas de seguridad informática y seguridad de la información (amenazas y riesgos cibernéticos, mecanismos de protección y técnicas de seguridad). Conceptos básicos de dispositivos de movilidad (portátiles, tablets, móviles).

Tema 46. Los sistemas ofimáticos. Procesadores de texto: concepto, funcionalidades, edición, configuración y formateo de textos y páginas, tablas, impresión y exportación de documentos, plantillas, combinación de correspondencia. Bases de Datos: concepto, funcionalidades, tablas, registros, formularios, consultas, informes, relaciones. Hojas de Cálculo: concepto, funcionalidades, edición y formateo de datos, uso de estilos y plantillas, empleo de imágenes, tablas, funciones, formularios y gráficos, impresión y exportación de documentos. Presentaciones: concepto y funcionalidades principales.

Tema 47. Herramientas informáticas. Internet, Intranet y correo electrónico: conceptos básicos, navegadores, búsquedas y acceso a la información. Herramientas de la web social: herramientas para compartir recursos, wikis, redes sociales y las plataformas virtuales de teleformación.

Tema 48. La Administración Electrónica y sus utilidades. Soportes de la Administración electrónica: La firma electrónica. El certificado electrónico. Prestadores de servicios de certificación. Puntos de acceso electrónico en Andalucía (Servicios, trámites y contenidos): Plataformas para la Administración electrónica, portales y sedes electrónicas. Carpeta ciudadana. Registros electrónicos y comunicaciones interiores. Notificaciones electrónicas. Normativa vigente en administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. Atención e información al ciudadano y tramitación de procedimientos administrativos a través de internet. Ventanilla electrónica. Accesos y contenidos de atención al profesional a través de web para los profesionales del Servicio Andaluz de Salud.

Plan de calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) Calidad en el sistema sanitario: métodos de evaluación. El modelo andaluz de acreditación y calidad. La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Introducción

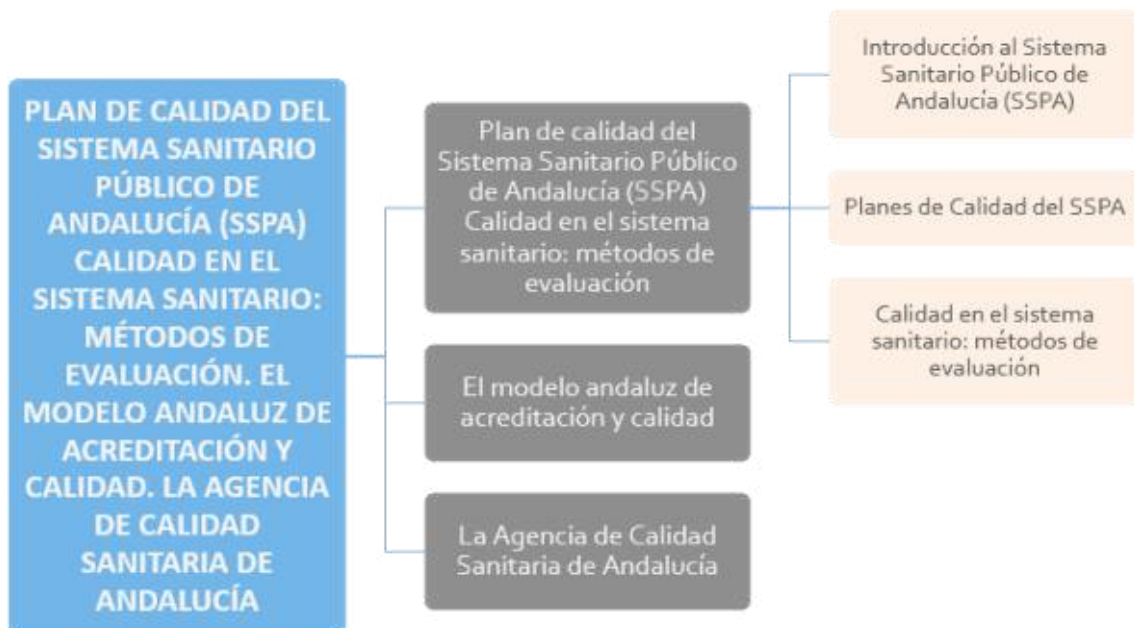
El Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) se erige como uno de los pilares fundamentales de la sanidad en España, ofreciendo atención sanitaria universal a la población andaluza. Desde su creación en los años 80, ha experimentado una notable evolución, adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad y a los retos del sistema de salud. La implementación de planes de calidad ha sido esencial para garantizar la excelencia en los servicios prestados, enfocándose en la mejora continua y la evaluación de resultados.

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) juega un papel clave en este proceso, promoviendo la acreditación de centros y profesionales, así como la implementación de indicadores de calidad que permiten medir la efectividad y la seguridad de la atención. La Estrategia de Calidad del SSPA, formulada en 2024, busca no solo consolidar los avances logrados, sino también abordar los nuevos desafíos que presenta el envejecimiento de la población y la atención a la cronicidad.

Objetivos

- Promover la mejora continua de la atención sanitaria y sociosanitaria en el SSPA, asegurando que los servicios sean integrados, seguros y centrados en el paciente.
- Fomentar la adaptación de las políticas y actuaciones del SSPA a la diversidad de la población andaluza, garantizando el acceso equitativo a los servicios de salud y respetando los derechos de todos los ciudadanos.
- Establecer un marco de referencia para la formación y evaluación continua de los profesionales de la salud, asegurando que cuenten con las competencias necesarias para ofrecer una atención de calidad y actualizada conforme a las mejores prácticas y evidencias científicas.

Mapa Conceptual



1. Plan de calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) Calidad en el sistema sanitario: métodos de evaluación

1.1. Introducción al Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)

El SSPA es uno de los sistemas sanitarios más grandes y complejos de España. Es gestionado por la **Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía** y se caracteriza por ser un modelo de cobertura universal que garantiza el acceso a servicios sanitarios de alta calidad para toda la población andaluza.

1.1.1. Antecedentes históricos

Desde su creación en los años 80, el SSPA ha evolucionado significativamente. Su desarrollo ha estado marcado por la descentralización de competencias del Sistema Nacional de Salud (SNS) hacia las comunidades autónomas, lo que permitió a Andalucía implementar políticas de salud adaptadas a las necesidades locales.

1.1.2. Marco normativo

El marco regulador del SSPA se fundamenta en:

- Ley General de Sanidad (1986): Proporcionó el marco básico para la universalización de la asistencia sanitaria en España.
- Ley de Salud de Andalucía (1998): Establece los principios rectores de la organización sanitaria andaluza.
- Planes de calidad sucesivos: Que orientan la mejora continua de los servicios.

1.2. Planes de Calidad del SSPA

Los planes de calidad son instrumentos estratégicos que guían la organización, evaluación y mejora continua de los servicios sanitarios.

1.2.1. I Plan de Calidad (2000-2004)

El primer plan tuvo como objetivo sentar las bases para la gestión de la calidad. Sus principales características fueron:

- Establecimiento de estándares básicos de calidad.
- Formación de profesionales en metodologías de calidad.
- Introducción de procesos de evaluación inicial.

Este plan se enfocó principalmente en la formación y la introducción de la cultura de calidad en el sistema.

1.2.2. II Plan de Calidad (2005-2008)

El segundo plan consolidó los avances del primero y estableció herramientas específicas para la gestión de la calidad. Se implementaron:

- Sistemas de acreditación de calidad: La creación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) fue fundamental en este proceso. Su misión principal era garantizar que centros, unidades y profesionales cumplieran con estándares definidos.
- Procesos asistenciales integrados (PAI): Herramientas clave para coordinar la atención entre diferentes niveles asistenciales.
- Indicadores de calidad: Se introdujeron métricas para medir la eficiencia, seguridad y satisfacción del paciente.

Ejemplo: Indicadores de adherencia a guías clínicas en patologías prevalentes como diabetes o enfermedades cardiovasculares.

1.2.3. III Plan de Calidad (2010-2014)

Este plan marcó un hito en la evolución de la calidad sanitaria en Andalucía. Los principales logros incluyen:

Avances tecnológicos

Historia Digital Única del Ciudadano (HDUC): Permitió integrar la información clínica del paciente en todos los niveles asistenciales.

Derechos y garantías de los ciudadanos y calidad asistencial en el SSPA. Tiempos de respuesta asistencial. Libre elección de centro sanitario y profesional. Cobertura sanitaria. Segunda opinión médica. Transparencia y calidad en los servicios. Derechos, garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada: organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas

Introducción

El Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) se fundamenta en el respeto y garantía de los derechos de los ciudadanos en el acceso a la atención sanitaria. Este marco normativo busca asegurar que todos los andaluces tengan acceso a una atención de calidad, en la que se priorizan la dignidad, la intimidad y la libre elección de los profesionales y centros sanitarios.

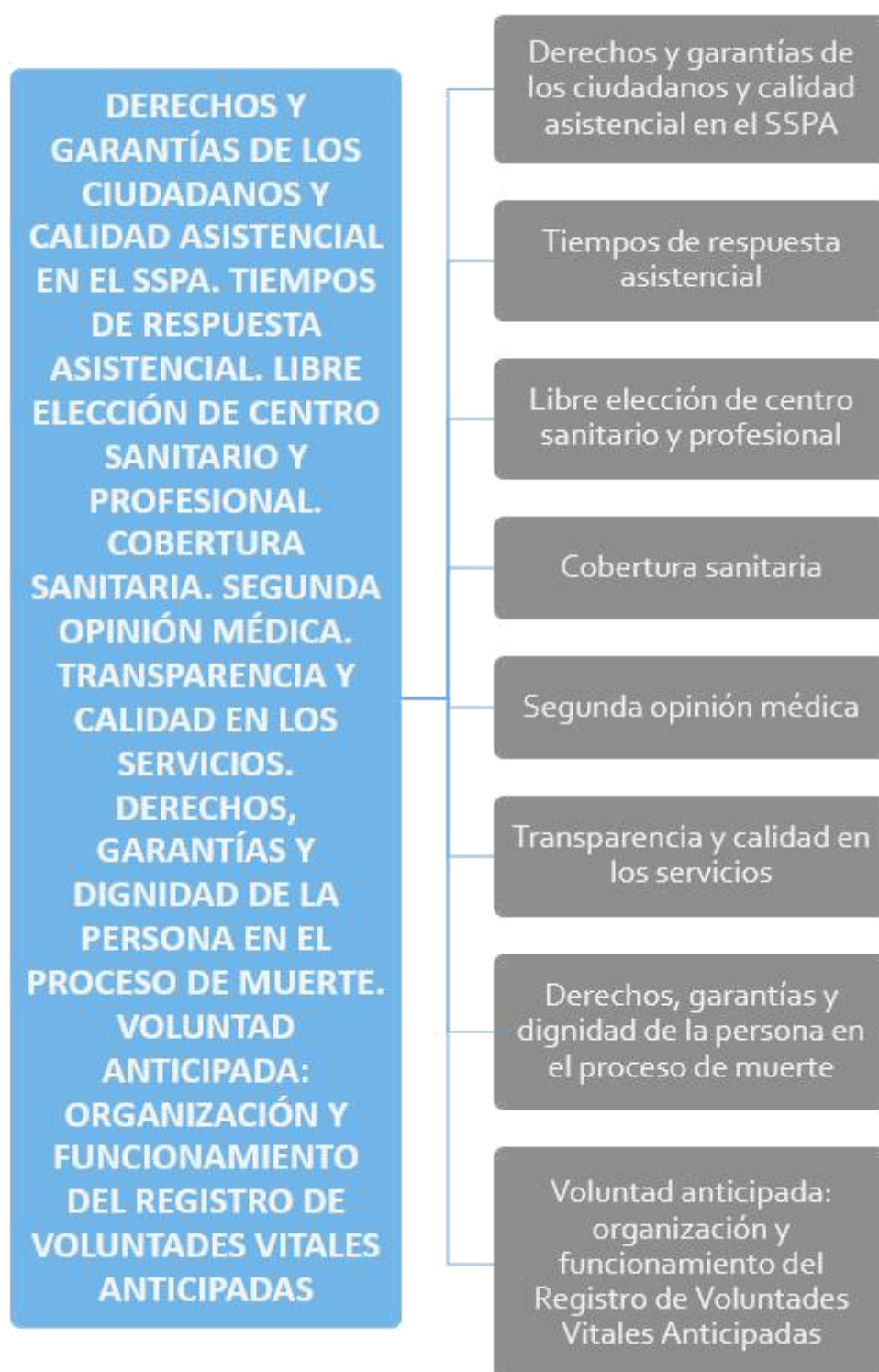
A través de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, se establecen derechos fundamentales que abarcan desde la información sobre los servicios disponibles hasta la confidencialidad en el manejo de datos personales.

Además, se contempla la importancia de los tiempos de respuesta asistencial, garantizando que los pacientes reciban atención en plazos razonables. Este enfoque integral no solo promueve la transparencia y la calidad en los servicios, sino que también respeta la voluntad del paciente en situaciones críticas, como el proceso de muerte y la posibilidad de ejercer la voluntad anticipada.

Objetivos

- Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos y garantías de los ciudadanos en el acceso a la atención sanitaria en el SSPA, asegurando que todos los usuarios estén informados sobre sus derechos y puedan ejercerlos efectivamente.
- Establecer mecanismos de mejora continua en la calidad asistencial y en los tiempos de respuesta, garantizando que los ciudadanos reciban atención oportuna y adecuada a sus necesidades de salud.
- Fomentar la participación activa de los ciudadanos en el proceso de atención sanitaria, facilitando la libre elección de profesionales y centros, así como la posibilidad de recibir una segunda opinión médica, asegurando así una atención personalizada y de calidad.

Mapa Conceptual



1. Derechos y garantías de los ciudadanos y calidad asistencial en el SSPA

Los Derechos y Garantías de los Ciudadanos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) están regulados bajo la **Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía** y otras normativas complementarias que aseguran la calidad asistencial.

Esta ley establece los principios fundamentales para la prestación de la atención sanitaria en Andalucía y los derechos de los ciudadanos en el proceso de atención sanitaria.

Los ciudadanos, al amparo de esta Ley, son titulares y disfrutan, con respecto a los servicios sanitarios públicos en Andalucía, de los siguientes derechos:

- a) A las prestaciones y servicios de salud individual y colectiva, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.
- b) Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que puedan ser discriminados por razón alguna.
- c) A la información sobre los factores, situaciones y causas de riesgo para la salud individual y colectiva.
- d) A la información sobre los servicios y prestaciones sanitarios a que pueden acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso.
- e) A disponer de información sobre el coste económico de las prestaciones y servicios recibidos.
- f) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y su estancia en cualquier centro sanitario.
- g) A ser advertidos de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y tratamiento que se les apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación que, en ningún caso, podrá comportar peligro adicional para su salud.
- h) En todo caso, será imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente y la aceptación por parte del médico y de la dirección del correspondiente centro sanitario.
- i) A que se le dé información adecuada y comprensible sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, el pronóstico, así como los riesgos, beneficios y alternativas de tratamiento.

- j) A que se les extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando así lo soliciten.
- k) A que quede constancia por escrito o en soporte técnico adecuado de todo su proceso. Al finalizar la estancia en una institución sanitaria, el paciente, familiar o persona a él allegada recibirá su informe de alta.
- l) Al acceso a su historial clínico.
- m) A la libre elección de médico, otros profesionales sanitarios, servicio y centro sanitario en los términos que reglamentariamente estén establecidos.
- n) A que se les garantice, en el ámbito territorial de Andalucía, que tendrán acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo máximo, en los términos y plazos que reglamentariamente se determinen.
- o) A que se les asigne un médico, cuyo nombre se les dará a conocer, que será su interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad.
- p) A que se respete su libre decisión sobre la atención sanitaria que se le dispense, previo consentimiento informado, excepto en los siguientes casos:
 - a. Cuando exista un riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas, siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.
 - b. Cuando exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica de la persona enferma y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, lo dispuesto en su declaración de voluntad vital anticipada y, si no existiera esta, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a ella.
- q) A disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso, en los términos en que reglamentariamente esté establecido.
- r) A negarse al tratamiento, excepto en los casos señalados en el epígrafe ñ) 1.º de este artículo y previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 6 de esta Ley.

Prevención de riesgos laborales. Riesgos laborales específicos en el desempeño de las funciones del/la Administrativo/a. Medidas preventivas específicas

Introducción

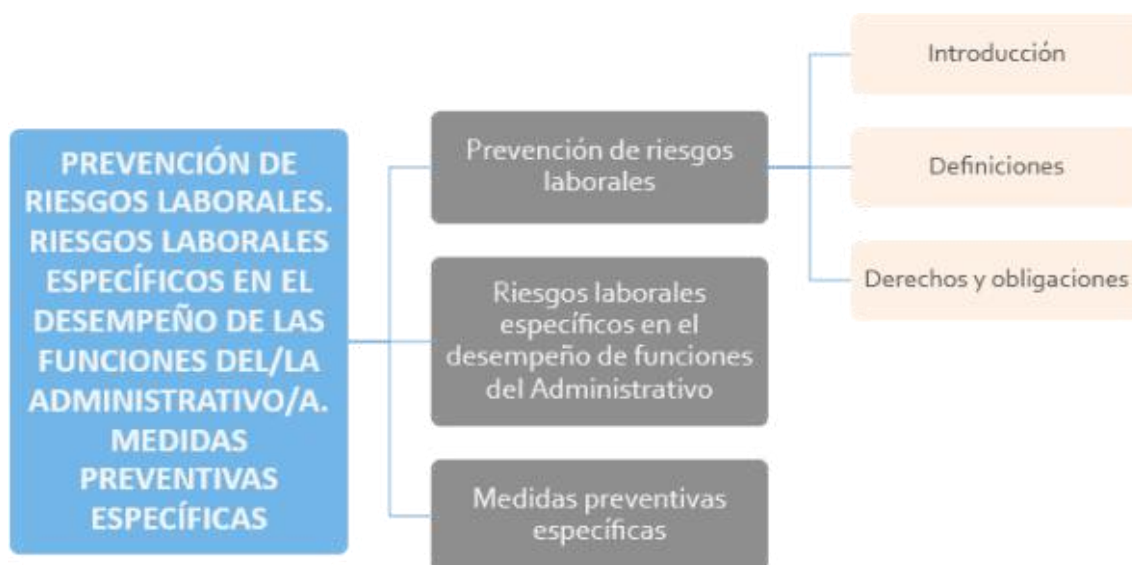
La prevención de riesgos laborales es un aspecto fundamental en cualquier entorno laboral, incluido el desempeño de funciones administrativas. En este tema se abordarán definiciones, derechos y obligaciones relacionados con la prevención de riesgos laborales en general, para luego adentrarse en los riesgos específicos que enfrenta un administrativo en el ejercicio de sus funciones.

Objetivos

- Entender los conceptos fundamentales relacionados con la prevención de riesgos laborales, incluyendo definiciones clave, así como los derechos y obligaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores en este ámbito, con el fin de promover un entorno laboral seguro y saludable.
- Identificar los riesgos laborales específicos que pueden surgir en el desempeño de las funciones del administrativo, comprendiendo las situaciones y actividades que pueden representar peligros para la salud y seguridad de estos profesionales en su lugar de trabajo.

- Desarrollar habilidades para evaluar y gestionar los riesgos laborales específicos asociados al trabajo del administrativo, aprendiendo a implementar medidas preventivas adecuadas para reducir la probabilidad de accidentes y enfermedades profesionales, y promover así un entorno laboral más seguro y saludable.

Mapa Conceptual



1. Prevención de riesgos laborales

1.1. Introducción

El **artículo 40.2 de la Constitución Española** encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales su pilar fundamental. En la misma se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas acciones preventivas, en coherencia con las decisiones de la Unión Europea que ha expresado su ambición de mejorar progresivamente las condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con una armonización paulatina de esas condiciones en los diferentes países europeos.

De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por consiguiente, la necesidad de armonizar nuestra política con la naciente política comunitaria en esta materia, preocupada, cada vez en mayor medida, por el estudio y tratamiento de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Buena prueba de ello fue la modificación del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea por la llamada Acta Única, a tenor de cuyo artículo 118 A) los Estados miembros vienen, desde su entrada en vigor, promoviendo la mejora del medio de trabajo para conseguir el objetivo antes citado de armonización en el progreso de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Este objetivo se ha visto reforzado en el Tratado de la Unión Europea mediante el procedimiento que en el mismo se contempla para la adopción, a través de Directivas, de disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente.

Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo jurídico europeo sobre protección de la salud de los trabajadores en el trabajo. De las Directivas que lo configuran, la más significativa es, sin duda, la 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria.

La **Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales** (en adelante LPRL) transpone al Derecho español la citada Directiva, al tiempo que incorpora al que será nuestro cuerpo básico en esta materia disposiciones de otras Directivas cuya materia exige o aconseja la transposición en una norma de rango legal, como son las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal. Así pues, el mandato constitucional contenido en el artículo 40.2 de nuestra ley de leyes y la comunidad jurídica establecida por la Unión Europea en esta materia configuran el soporte básico en que se asienta la LPRL. Junto a ello, los compromisos contraídos con la Organización Internacional del Trabajo a partir de la ratificación del Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, enriquecen el contenido del texto legal al incorporar sus prescripciones y darles el rango legal adecuado dentro de nuestro sistema jurídico.

La **protección del trabajador frente a los riesgos laborales** exige una actuación en la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. La planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y su actualización periódica a medida que se alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente y globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y el control de la efectividad de dichas medidas constituyen los elementos básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos laborales que la Ley plantea. Y, junto a ello, claro está, la información y la formación de los trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características de las personas que en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que realizan.

El Estatuto Básico del Empleado Público. Objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos. Adquisición y pérdida de la relación de servicio

Introducción

El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) es una norma fundamental en el ámbito de la administración pública en España, que establece el régimen jurídico aplicable a los empleados públicos. Su objetivo principal es regular las condiciones de trabajo, derechos y deberes de los funcionarios y personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

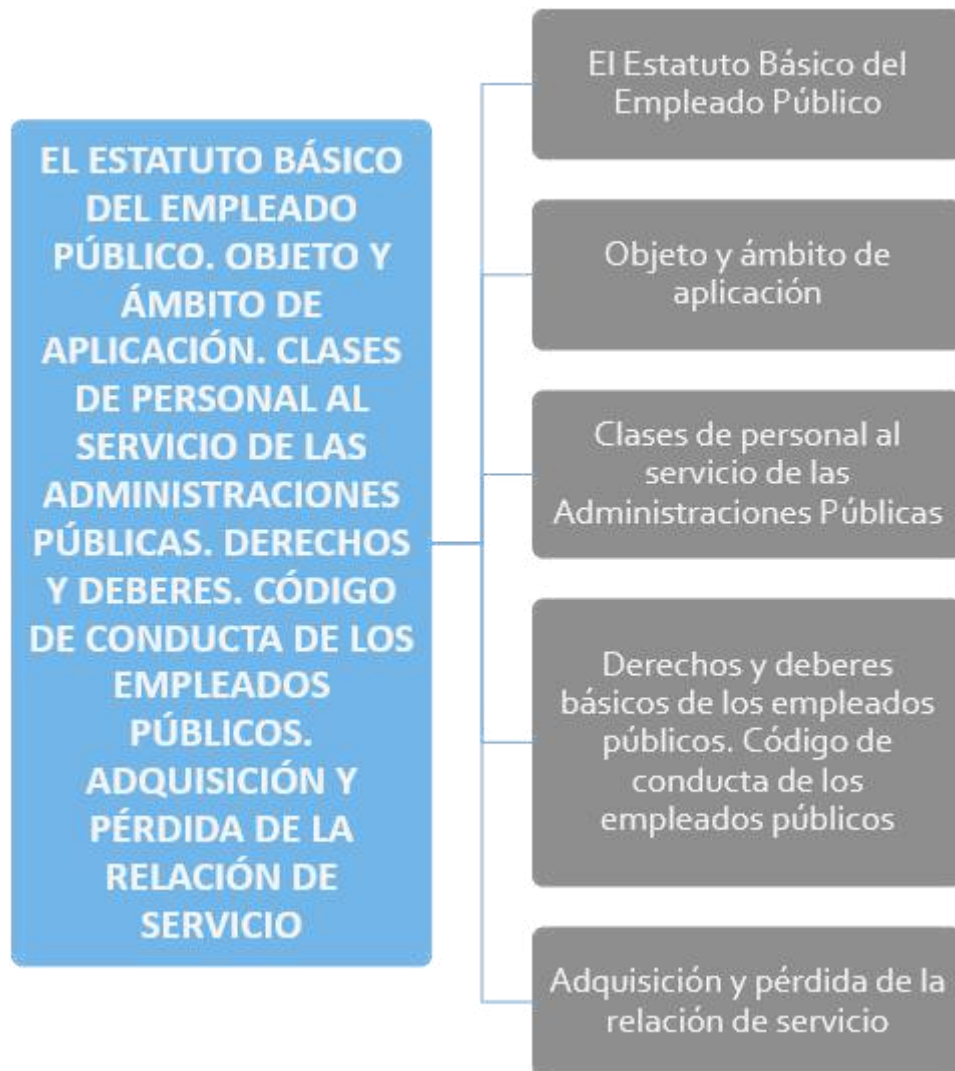
Este marco normativo busca garantizar la igualdad de oportunidades, el mérito y la capacidad en el acceso y promoción dentro del empleo público, así como asegurar la transparencia y eficacia en la gestión de los recursos humanos. A través de sus diferentes títulos y capítulos, el EBEP aborda aspectos cruciales como la adquisición y pérdida de la relación de servicio, los derechos retributivos, la negociación colectiva y el régimen disciplinario, proporcionando así un marco integral que regula la conducta y el desempeño de los empleados públicos.

En este contexto, es esencial que tanto los aspirantes a un puesto en la administración pública como los actuales empleados conozcan a fondo este estatuto, ya que su comprensión es fundamental para el ejercicio de sus funciones y la promoción de un servicio público eficiente y responsable.

Objetivos

- Establecer un marco normativo claro y accesible que regule los derechos, deberes y condiciones laborales de los empleados públicos, asegurando así la equidad y la justicia en el acceso y ejercicio de la función pública.
- Fomentar la transparencia en la gestión de los recursos humanos en las Administraciones Públicas, garantizando que los procesos de selección, promoción y evaluación se realicen de manera objetiva y basada en el mérito.
- Impulsar la formación y cualificación continua de los empleados públicos, promoviendo su desarrollo profesional y asegurando que cuenten con las competencias necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficaz y eficiente.

Mapa Conceptual



1. El Estatuto Básico del Empleado Público

1.1. Estructura del TREBEP

El EBEP consta de 8 Títulos, con la siguiente estructura:

- TÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación
- TÍTULO II. Personal al servicio de las Administraciones Públicas
 - CAPÍTULO I. Clases de personal
 - CAPÍTULO II. Personal directivo
- TÍTULO III. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos
 - CAPÍTULO I. Derechos de los empleados públicos
 - CAPÍTULO II. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño
 - CAPÍTULO III. Derechos retributivos
 - CAPÍTULO IV. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión
 - CAPÍTULO V. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones
 - CAPÍTULO VI. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta
- TÍTULO IV. Adquisición y pérdida de la relación de servicio
 - CAPÍTULO I. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio
 - CAPÍTULO II. Pérdida de la relación de servicio
- TÍTULO V. Ordenación de la actividad profesional
 - CAPÍTULO I. Planificación de recursos humanos
 - CAPÍTULO II. Estructuración del empleo público
 - CAPÍTULO III. Provisión de puestos de trabajo y movilidad
- TÍTULO VI. Situaciones administrativas
- TÍTULO VII. Régimen disciplinario
- TÍTULO VIII. Cooperación entre las Administraciones Públicas

- Disposiciones adicionales (17)
- Disposiciones transitorias (9)
- Disposiciones derogatorias (1)
- Disposiciones finales (4)

1.2. Contenido

El **contenido** de cada Título es el siguiente:

- **El Título I desarrolla el Objeto y ámbito de aplicación de la Ley**, señalando que es de aplicación al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las diferentes Administraciones Públicas.
- **El Título II regula las diferentes clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas**, definiendo los diferentes tipos de empleados públicos funcionarios de carrera e interinos, personal laboral, personal eventual , y regulando en subtítulo aparte la nueva figura del personal directivo.
- **El Título III desarrolla los derechos y deberes de los empleados públicos**, así como su Código de Conducta, incluyendo un listado de derechos básicos y comunes de los empleados públicos, diferenciando entre derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente, y regulando de manera particularizada el derecho a la carrera, los derechos retributivos, así como los derechos colectivos y el derecho a la jornada, permisos y vacaciones. También introduce una regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos, fundada en principios éticos y reglas de comportamiento, que constituyen un auténtico código de conducta.
- Por su parte, el **Título IV regula la Adquisición y pérdida de la relación de servicio**, estableciendo los principios y requisitos del acceso al empleo público así como los órganos y sistemas de selección. Igualmente detalla los requisitos para el acceso por parte de nacionales de otros Estados y las condiciones de acceso de las personas con discapacidad. De la misma forma se regulan los requisitos para la adquisición de la condición de funcionario de carrera, así como las causas de pérdida de tal condición de manera detallada.

La Administración Pública. El concepto de Administración Pública y su papel en el ordenamiento político del Estado. El sometimiento de la Administración al Derecho. Los principios de legalidad y jerarquía normativa. La discrecionalidad de la Administración: concepto, fundamento y límites

Introducción

La Administración Pública es un componente esencial del Estado, desempeñando un papel crucial en la ejecución de políticas y en la satisfacción de las necesidades colectivas. A lo largo de la historia, su concepto ha evolucionado, reflejando cambios en la organización política y social.

En la actualidad, la Administración Pública se entiende como un conjunto de entidades y organismos que operan bajo el marco del Poder Ejecutivo, con la responsabilidad de implementar las leyes y garantizar el bienestar general de la ciudadanía.

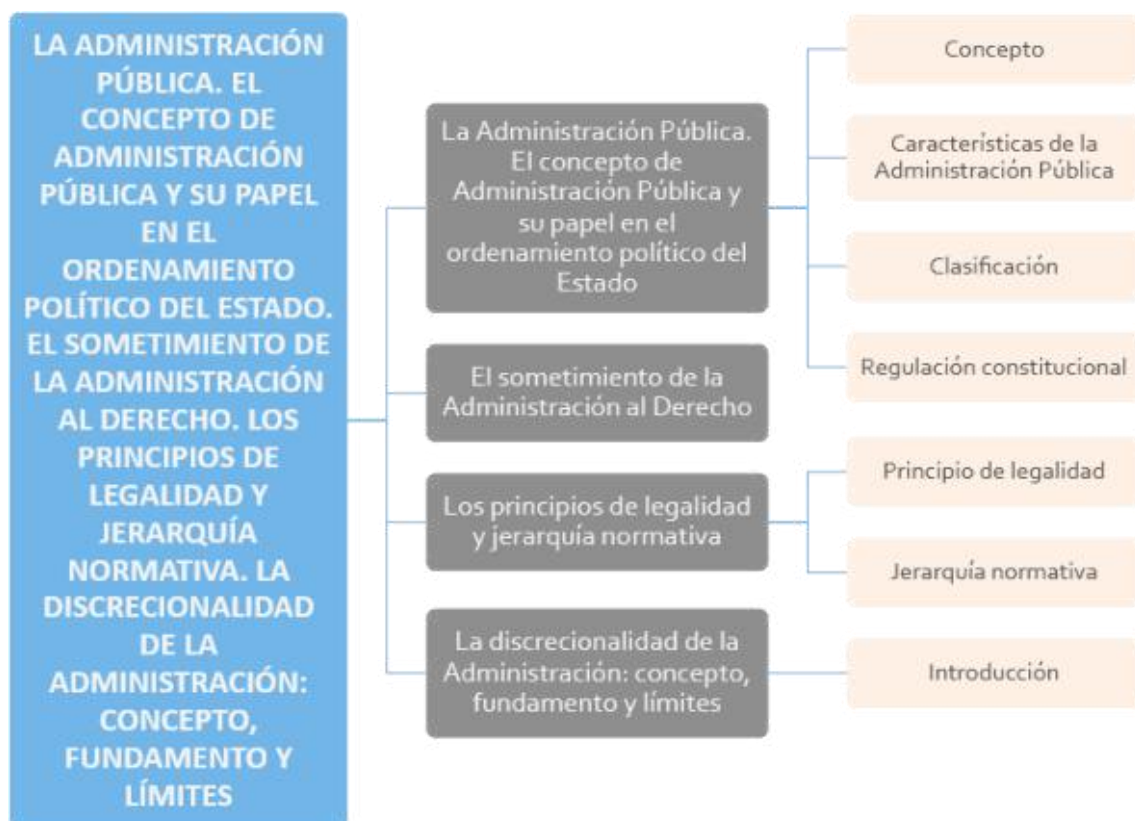
Este proceso está regido por principios fundamentales como la legalidad, la eficacia y la jerarquía normativa, que aseguran que sus acciones se realicen de manera transparente y responsable.

La interacción entre la Administración Pública y el Estado de Derecho es vital, ya que establece el marco dentro del cual se deben respetar los derechos fundamentales y la legalidad en todas las actuaciones administrativas.

Objetivos

- Analizar el concepto de Administración Pública y su evolución dentro del marco político y legal del Estado.
- Identificar y explicar los principios que rigen la actuación de la Administración Pública, asegurando su sometimiento al Derecho y la protección de los derechos ciudadanos.
- Examinar la estructura organizativa de la Administración Pública en los diferentes niveles territoriales y su papel en la ejecución de políticas públicas y servicios esenciales.

Mapa Conceptual



1. La Administración Pública. El concepto de Administración Pública y su papel en el ordenamiento político del Estado

1.1. Concepto

La doctrina contemporánea aborda la identificación de la Administración Pública a través de tres enfoques principales, cada uno de los cuales ofrece una perspectiva distinta sobre su naturaleza y funciones.

El primero es el enfoque subjetivo, que concibe la Administración Pública como el conjunto de entidades que forman parte del Poder Ejecutivo, limitándose a cumplir las leyes establecidas. Desde esta perspectiva, se interpreta la Administración como un mecanismo subordinado al marco normativo establecido por el poder legislativo.

El segundo enfoque es el objetivo, según el cual cualquier organismo público que lleve a cabo tareas de administración, sin importar el poder al que esté adscrito, forma parte de la Administración Pública. Este enfoque se centra en la función administrativa en sí misma, más allá de las estructuras orgánicas en las que se desenvuelve.

Por último, el enfoque formal define la Administración Pública basándose en el tratamiento que esta y sus actos reciben por parte del ordenamiento jurídico aplicable, que en este caso es el Derecho Administrativo. Este enfoque enfatiza el marco normativo que regula tanto a la Administración como a su actividad.

Desde un punto de vista etimológico, el concepto de "administración" engloba dos ideas esenciales: gestión y subordinación. Por un lado, la función administrativa implica una actividad gestora orientada a alcanzar objetivos mediante la utilización de recursos adecuados. Por otro lado, esta actividad está subordinada, ya que los objetivos y los medios son determinados por instancias superiores, como las decisiones de carácter político.

De acuerdo con esta perspectiva, la Administración Pública puede definirse como el conjunto de estructuras organizativas del Estado, incluyendo las Comunidades Autónomas y la Administración Local, que se encuentran bajo la dirección del Poder Ejecutivo. Su propósito es el cumplimiento de los fines e intereses públicos, actuando en calidad de persona jurídica atribuida por el Derecho.

En este contexto, el Poder Ejecutivo se distingue como una de las tres principales funciones del Estado, junto con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Su misión esencial consiste en garantizar la efectiva aplicación de las leyes dictadas por el Poder Legislativo. En contrapartida, el Poder Judicial tiene la tarea de interpretar estas leyes, asegurar su cumplimiento o, en su caso, anularlas si contravienen el marco normativo superior.

Esta visión global permite entender la Administración Pública como un elemento indispensable para el funcionamiento del Estado, articulando la ejecución de las leyes y asegurando la gestión eficiente de los recursos y servicios destinados al interés general.

PODER JUDICIAL	PODER EJECUTIVO	PODER LEGISLATIVO
Jueces y Tribunales	Gobierno	Parlamento (Congreso Diputados/Senado)
Cuidar el sometimiento a la ley (ciudadanos/poderes públicos)	Hacer ejecutar la ley y demás actuaciones dirigidas a satisfacer el bien común	Dictar leyes y toma de decisiones trascendentales para la nación

La Administración Pública en el ordenamiento jurídico español se configura como una organización plenamente estructurada y sometida al servicio de la comunidad. No actúa como representante de esta, a diferencia del Parlamento, sino como una institución orientada a satisfacer los intereses generales bajo un marco jurídico claramente definido. Este carácter se manifiesta en su subordinación al Derecho, tal como establece la Constitución Española.

De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, la Administración Pública está obligada a servir con objetividad a los intereses generales, regida por principios como la eficacia, la jerarquía, la descentralización, la desconcentración y la coordinación. Estos principios garantizan que su actuación esté plenamente sometida a la ley y al Derecho. La Administración, como órgano del Estado, se distingue por poseer una personalidad jurídica propia, que le permite actuar como sujeto de relaciones jurídicas dentro del ámbito del Derecho Administrativo.

Normativa vigente sobre el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (I): Ámbito de aplicación. Los interesados: concepto y capacidad de obrar. Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración. La obligación de resolver: el silencio administrativo. Términos y plazos. El acto administrativo: concepto y requisitos; motivación; eficacia; notificación y la publicación. Nulidad y anulabilidad de los actos

Introducción

El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas en España se rige por un marco normativo que busca garantizar la transparencia, eficacia y objetividad en la gestión pública.

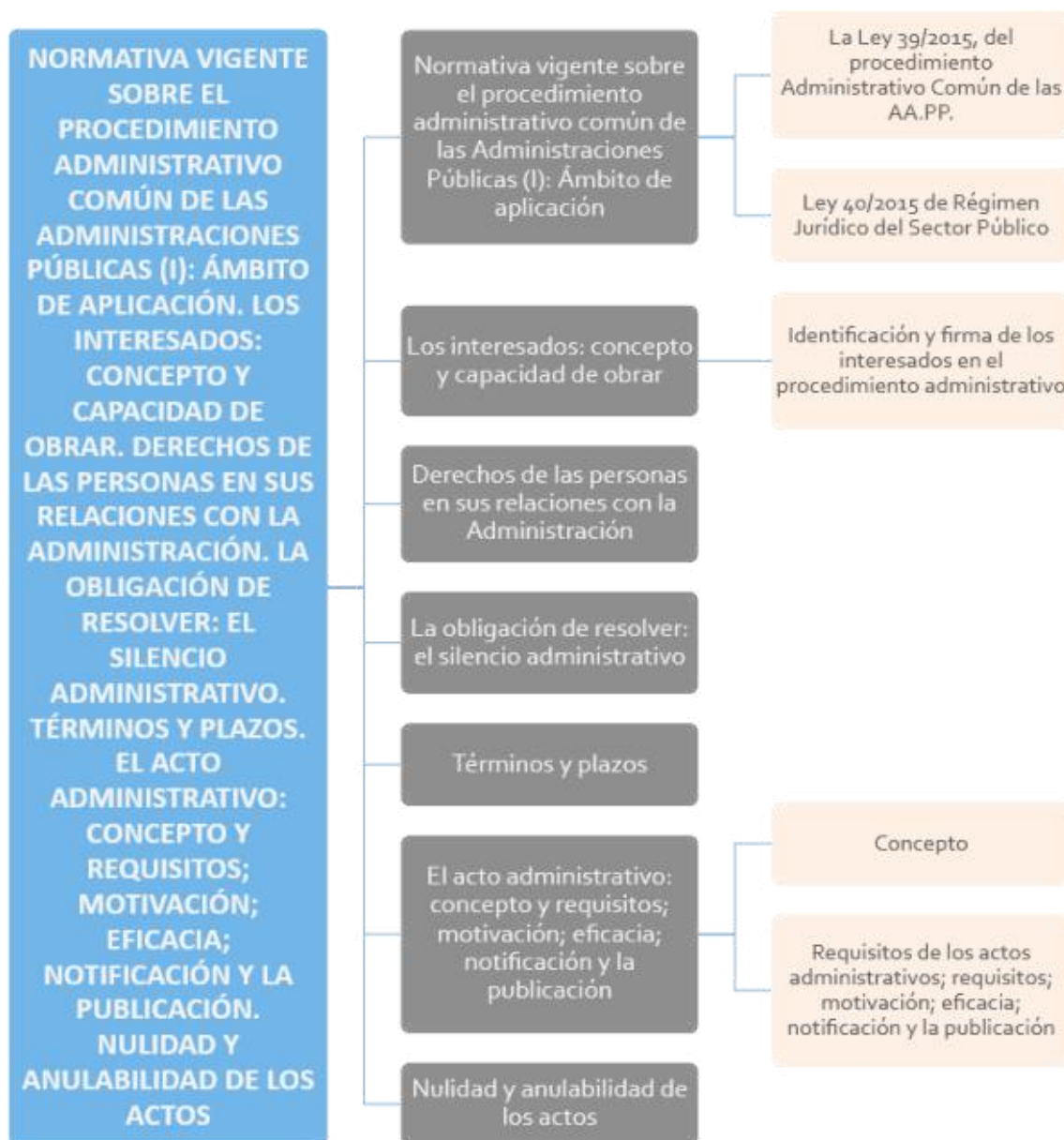
La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, junto con la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece las bases sobre las cuales se desarrollan las relaciones entre las Administraciones y los ciudadanos.

Esta normativa no solo busca regular el ejercicio de la potestad administrativa, sino también proteger los derechos de los interesados, asegurando que sus interacciones con la Administración sean justas y accesibles. A través de un enfoque que promueve la simplificación de trámites y la utilización de medios electrónicos, la legislación actual pretende modernizar y optimizar el funcionamiento administrativo.

Objetivos

- Examinar las disposiciones fundamentales de la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, así como su impacto en el procedimiento administrativo común y en las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos.
- Reconocer y detallar los derechos que tienen las personas en sus interacciones con la Administración, así como las obligaciones que esta tiene para garantizar su ejercicio.
- Facilitar la comprensión de los términos, plazos y requisitos que rigen el acto administrativo, así como la importancia del silencio administrativo y la notificación de actos, con el fin de fomentar una participación informada y activa de los ciudadanos en el ámbito administrativo.

Mapa Conceptual



1. Normativa vigente sobre el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (I): Ámbito de aplicación

Atendiendo a las diferentes disposiciones normativas existentes en la actualidad se debe destacar que el régimen jurídico de las Administraciones Públicas se encuentra recogido en dos disposiciones principales siendo estas la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015.

1.1. La Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las AA.PP.

1.1.1. Contenido y estructura

El art. 103 de la Constitución dispone que *"la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho"*.

Tras más de veinte años de vigencia de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recientemente el poder legislativo ha llevado a cabo una reforma del ordenamiento jurídico público articulada en dos ejes fundamentales: las relaciones «ad extra» (hacia afuera) y «ad intra» (hacia dentro) de las Administraciones Públicas. Para ello se han impulsado simultáneamente dos nuevas leyes que constituirán los pilares sobre los que se asentará en adelante el Derecho administrativo español: la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015), y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015).

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas constituye el primero de estos dos ejes, al establecer una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad de autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa.

Queda así reunido en cuerpo legislativo único la regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos como ley administrativa de referencia que se ha de complementar con todo lo previsto en la normativa presupuestaria respecto de las actuaciones de las Administraciones Públicas, destacando especialmente lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; la Ley 47/2003, General Presupuestaria, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La Ley se estructura en siete títulos, con el siguiente contenido:

TÍTULO PRELIMINAR. El título preliminar, de disposiciones generales, aborda el ámbito objetivo y subjetivo de la Ley. Entre sus principales novedades, cabe señalar, la inclusión en el objeto de la Ley, con carácter básico, de los principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones. Se prevé la aplicación de lo previsto en esta Ley a todos los sujetos comprendidos en el concepto de Sector Público, si bien las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas y supletoriamente por esta Ley.

TÍTULO I: LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO. El Título I regula entre otras cuestiones, las especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del Derecho administrativo, haciéndola extensiva por primera vez a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente. En materia de representación, se incluyen nuevos medios para acreditarla en el ámbito exclusivo de las Administraciones Públicas, como son el apoderamiento «apud acta», presencial o electrónico, o la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública u Organismo competente. Igualmente, se dispone la obligación de cada Administración Pública de contar con un registro electrónico de apoderamientos, pudiendo las Administraciones territoriales adherirse al del Estado, en aplicación del principio de eficiencia.

Por otro lado, este título dedica parte de su articulado a una de las novedades más importantes de la Ley: la separación entre identificación y firma electrónica y la simplificación de los medios para acreditar una u otra, de modo que, con carácter general, sólo será necesaria la primera, y se exigirá la segunda cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado.

Normativa vigente sobre el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (II): Derechos del interesado en el procedimiento.

Tramitación ordinaria del procedimiento: iniciación; ordenación; instrucción y finalización. Tramitación simplificada del procedimiento. Ejecución. Revisión de los actos en vía administrativa: la revisión de oficio y los recursos administrativos.

Especialidades en los procedimientos de naturaleza sancionadora. Especialidades en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial

Introducción

El procedimiento administrativo común es un conjunto de normas y principios que regulan la actuación de las Administraciones Públicas en relación con los ciudadanos. La Ley 39/2015 establece un marco normativo que garantiza los derechos de los interesados, asegurando la transparencia y la participación activa en los procedimientos administrativos.

Esta normativa es fundamental para el correcto desarrollo de la actividad administrativa, ya que establece los derechos de los ciudadanos, las fases del procedimiento y los mecanismos de revisión y control.

Objetivos

- Analizar los derechos del interesado en el procedimiento administrativo común, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, para garantizar una participación efectiva y transparente en los procesos administrativos.
- Describir las fases del procedimiento administrativo, incluyendo la iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución, para proporcionar una visión clara del funcionamiento del mismo y sus implicaciones para los ciudadanos.
- Examinar las especialidades en los procedimientos de naturaleza sancionadora y en materia de responsabilidad patrimonial, con el fin de identificar los mecanismos de protección y defensa de los derechos de los ciudadanos en estos contextos.

1. Normativa vigente sobre Régimen Jurídico del Sector Público (I): Ámbito subjetivo y principios generales

1.1. Ley 40/2015

Mediante Ley 40/2015, de 1 de octubre, se ha regulado el Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor se produjo como la Ley 39/2015 el 2 de octubre de 2016. Su estructura es la siguiente:

- Preámbulo
- **TÍTULO PRELIMINAR.** Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público
 - CAPÍTULO I. Disposiciones generales
 - CAPÍTULO II. De los órganos de las Administraciones Públicas
 - Sección 1.^a De los órganos administrativos
 - Sección 2.^a Competencia
 - Sección 3.^a Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas
 - Subsección 1.^a Funcionamiento
 - Subsección 2.^a De los órganos colegiados en la Administración General del Estado
 - Sección 4.^a Abstención y recusación
 - CAPÍTULO III. Principios de la potestad sancionadora
 - CAPÍTULO IV. De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
 - Sección 1.^a Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
 - Sección 2.^a Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas
 - CAPÍTULO V. Funcionamiento electrónico del sector público
 - CAPÍTULO VI. De los convenios

- **TÍTULO I. Administración General del Estado**
 - CAPÍTULO I. Organización administrativa
 - CAPÍTULO II. Los Ministerios y su estructura interna
 - CAPÍTULO III. Órganos territoriales
 - Sección 1.^a La organización territorial de la Administración General del Estado
 - Sección 2.^a Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
 - Sección 3.^a Los Subdelegados del Gobierno en las provincias
 - Sección 4.^a La estructura de las delegaciones del gobierno
 - Sección 5.^a Órganos colegiados
 - CAPÍTULO IV. De la Administración General del Estado en el exterior
- **TÍTULO II. Organización y funcionamiento del sector público institucional**
 - CAPÍTULO I. Del sector público institucional
 - CAPÍTULO II. Organización y funcionamiento del sector público institucional estatal
 - CAPÍTULO III. De los organismos públicos estatales
 - Sección 1.^a Disposiciones generales
 - Sección 2.^a Organismos autónomos estatales
 - Sección 3.^a Las entidades públicas empresariales de ámbito estatal
 - Sección 4.^a Agencias estatales
 - CAPÍTULO IV. Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal
 - CAPÍTULO V. De las sociedades mercantiles estatales
 - CAPÍTULO VI. De los consorcios
 - CAPÍTULO VII. De las fundaciones del sector público estatal
 - CAPÍTULO VIII. De los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal
- **TÍTULO III. Relaciones interadministrativas**
 - CAPÍTULO I. Principios generales de las relaciones interadministrativas
 - CAPÍTULO II. Deber de colaboración
 - CAPÍTULO III. Relaciones de cooperación
 - Sección 1.^a Técnicas de cooperación
 - Sección 2.^a Técnicas orgánicas de cooperación
 - CAPÍTULO IV. Relaciones electrónicas entre las Administraciones

Normativa vigente sobre Régimen Jurídico del Sector Público (II): La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y de las autoridades y del personal al servicio de la Administración Pública. Derecho a indemnización

Introducción

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es un aspecto fundamental del régimen jurídico del sector público, ya que garantiza el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por los daños que puedan sufrir como resultado de la actuación de la Administración.

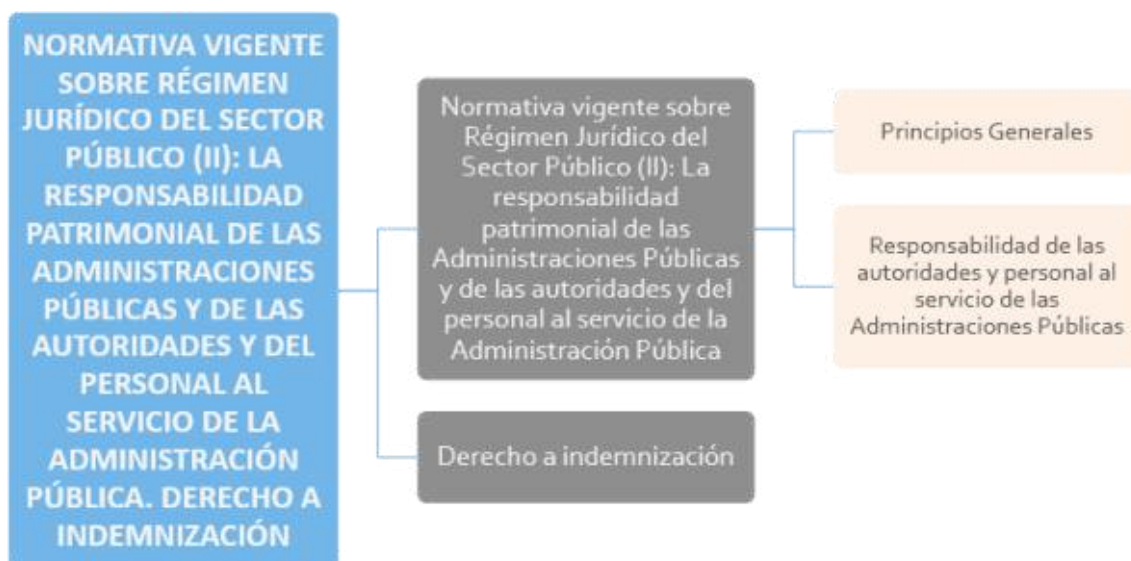
Este principio se encuentra respaldado por la normativa vigente, que establece los parámetros y condiciones bajo los cuales los particulares pueden reclamar una indemnización. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, son las normativas clave que regulan este ámbito, asegurando que la responsabilidad patrimonial no sea solo un principio teórico, sino una realidad aplicable en la práctica.

Además, se contemplan las circunstancias bajo las cuales las autoridades y el personal al servicio de la Administración pueden ser considerados responsables por sus acciones, ya sean estas por dolo, culpa o negligencia.

Objetivos

- Analizar los principios generales que rigen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, identificando las condiciones bajo las cuales los ciudadanos tienen derecho a indemnización.
- Examinar las normativas vigentes que regulan la responsabilidad patrimonial, incluyendo las leyes relevantes y los procedimientos administrativos necesarios para la reclamación de indemnizaciones.
- Evaluar la responsabilidad de las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas, considerando las implicaciones de sus acciones en el contexto de la responsabilidad patrimonial y los derechos de los ciudadanos.

Mapa Conceptual



1. Normativa vigente sobre Régimen Jurídico del Sector Público (II): La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y de las autoridades y del personal al servicio de la Administración Pública

1.1. Principios Generales

Principios de la responsabilidad. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La **anulación** en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.

La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurren los **requisitos previstos** en los apartados anteriores:

- a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurren los requisitos establecidos.
- b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con los requisitos establecidos.

Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

Si la **lesión** es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:

- a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.
- b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.
- c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.

La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.

La **responsabilidad patrimonial del Estado** por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.

El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

